

## **EDITORIAL**

### **La violencia, un fenómeno complejo.**

En El Salvador vivimos rodeados de violencia. Esta violencia le cuesta al país 1700 millones de dólares al año: una cantidad que supera ampliamente la suma de lo invertido en educación (\$470 millones) y en salud (\$248 millones). Con más de 40 muertes violentas por cada 100 mil habitantes al año, el país está, desde hace varios años, en la lista de los más violentos del continente. 2003, el año en que inició el Plan Mano Dura, marcó el repunte de los homicidios. El peor de los últimos seis años fue el 2004, con 2764 muertes. Durante el presente año, el número de víctimas tiene una clara tendencia al alza: en el primer cuatrimestre se han contabilizado ya 1051 muertos. Si la tendencia continúa, al final del año tendremos más de 3100 víctimas.

Esa tragedia nos hace vivir en tensión permanente. El transporte en autobús, por ejemplo –algo que tiene que hacer cada jornada el 80% de los salvadoreños- es una acción cargada de temor e inseguridad debido a que sigue creciendo el número de acciones violentas en las unidades de transporte público. Lo mismo podemos decir de muchas comunidades marginales y hasta de los alrededores de algunos institutos públicos en los que se ha hecho necesaria la presencia policial. Hay violencia en la forma en que nos manifestamos en las calles para protestar y exigir nuestros derechos, y hay violencia en la manera en que rechazamos todas las manifestaciones de inconformidad.

Una mirada atenta nos permitirá reconocer que la violencia está en todas partes y se expresa de formas distintas –algunas de ellas muy sutiles-: en la familia, en las iglesias, en los ambientes laborales, en la calle, en los estadios, en las aulas y en los supermercados. Se ejerce violencia negando la palabra en la familia, despidiendo a los líderes sindicales, haciendo de la escuela y del templo lugares en los que se transmiten verdades incuestionables, reduciendo el deporte a competencia, vendiendo productos con fechas vencidas, promoviendo un tipo de libre mercado que, por tener sus propias leyes, no acepta ninguna restricción.

Vivimos rodeados de violencia. Continuamente somos víctimas o responsables de acciones violentas, a tal punto que hemos desarrollado cierta inmunidad. Consideramos casi normal algunos actos violentos: que los empleados ganen menos del salario mínimo y sin gozar de seguridades sociales, que una empleada doméstica trabaje hasta 14 horas diarias sin tener día libre, que el 60% de los jóvenes del país no llegue a bachillerato, que los peatones deban caminar por la calle porque las aceras están llenas de carros y ventas, que los edificios no contemplen facilidades de acceso para las personas con ciertas discapacidades, que en una colonia falte el agua por quince días.

Los diarios de mayor circulación del país reportan diariamente el número de muertos casi con la normalidad con que se reportan los precios internacionales del café y del petróleo. En los periodos vacacionales el “mortímetro” nos pone siempre en el primer lugar de la región centroamericana, y la mayoría de las muertes se dan en hechos violentos.

La violencia no es un problema “neutro” –la violencia sin más-. Es esa violencia concreta que cada día engendra, ella misma, más violencia: la violencia que procede de alguien y va dirigida hacia alguien, la de los nueve muertos diarios, la de los numerosos niños y mujeres golpeados en los hogares por personas de quienes deberían recibir protección, la de los despedidos de sus trabajos sin ningún tipo de indemnización, la de la impunidad en que se hallan más del 50% de los agresores.

La condición violenta en que nos vemos obligados a vivir cotidianamente suscita en los ciudadanos muchas interrogantes: ¿por qué no acabó la violencia después de los acuerdos de paz?, ¿cuáles son las causas de este fenómeno?, ¿qué podemos hacer para enfrentarla?

Aunque se han dado muchas explicaciones al fenómeno de la violencia, muchas de ellas son parciales por haber sido formuladas en contextos de campaña política. En efecto, la violencia ha sido muy bien aprovechada como herramienta publicitaria electoral. En este contexto hay quienes encuentran la explicación de la violencia actual en los 12 años de guerra que sufrió el país en la década de los 80 y principios de los 90. Podemos, sin embargo, objetar que países vecinos como Honduras, en los que no hubo conflicto armado interno, sufren un problema similar al nuestro. Lo mismo podemos afirmar de Costa

Rica, donde la violencia está experimentando un aumento sin precedentes. Otros creen que la principal causa de la violencia es la pobreza en que viven sumidos millones de salvadoreños. También aquí podríamos observar que países como Nicaragua, con menores índices de desarrollo humano, sufren menos violencia que nosotros. También hay quienes intentan conectar la violencia con el autoritarismo y las formas antidemocráticas de gobierno sufridas desde la colonia. Algunos grupos religiosos encuentran la causa de la violencia en la ruptura familiar y en la falta de educación en valores.

Seguramente en todas esas explicaciones hay mucho de verdad. Pero ninguna de ellas, tomada aisladamente, explica suficientemente la violencia del país. Sus orígenes son sumamente complejos. En ella confluye una multitud de causas diversas pero relacionadas e interdependientes. En esa red de causas encontramos, ante todo, los acontecimientos violentos del pasado que han ido configurado a la sociedad salvadoreña, desde la conquista, pasando por las formas violentas de despojo de las tierras comunales indígenas por parte de los ladinos, hasta las sangrientas masacres de indígenas y campesinos en pleno siglo XX.

La violencia actual conecta también con el militarismo, con las diversas expresiones de nacionalismo y los violentos conflictos internos acontecidos desde la independencia. En esa red cabe también el sistema educativo autoritario y excluyente implantado en el país desde el siglo XIX, así como las nuevas políticas educativas, claramente preocupadas por formar hombres y mujeres competitivos.

En ese conjunto articulado de causas aparece también la intolerancia y hasta la represión con la que se ha reaccionado ante todo proyecto político que no coincida con los intereses de los grupos económicamente poderosos del país, así como el estilo de vida violento asumido por algunos los emigrantes salvadoreños en Estados Unidos y que es reproducido en El Salvador como fruto de la deportación. También incide en la violencia la implementación de políticas claramente represivas ante el fenómeno de las maras, así como el autoritarismo ejercido por los gobernantes y legisladores que se cierran al diálogo y a la consulta ciudadana y que son capaces de imponer la dolarización o de aprobar un TLC con Estados Unidos sin escuchar a los que, con todo derecho, se oponían.

En esta compleja red confluye también la grave problemática social de la mayoría de los salvadoreños. La pobreza creciente que se expresa, por ejemplo, en el hacinamiento, en la inseguridad laboral, en las escasas posibilidades de salir de la miseria, en formas distintas de economía informal o en prácticas laborales ilegales, se convierte frecuentemente en un detonante de la violencia dentro y fuera de la familia.

Los medios de difusión colectiva, especialmente la televisión y el cine, así como otras formas de entretenimiento electrónico que proponen modelos de vida violentos, tienen también su cuota de responsabilidad en ese tejido de causas. Lo mismo debemos decir de la gran empresa salvadoreña, considerada la más voraz de la región, a pesar de su repetido discurso sobre la responsabilidad social empresarial: esa voracidad se ha expresado, entre otras cosas, en el daño ocasionado al medio ambiente, en el cuestionamiento y hasta rechazo de toda iniciativa tendiente al incremento del salario mínimo y, en algunos casos, en la evasión fiscal que afecta las posibilidades de inversión social por parte del Estado.

La impunidad frente a la corrupción en las distintas esferas del gobierno así como las deficiencias del sistema judicial en los delitos cotidianos, se suman a la compleja red de causas. Casos emblemáticos como los de Mons. Romero, los jesuitas y Katya Miranda, ejemplifican la debilidad en los intentos por hacer justicia.

Y si las causas de la violencia son complejas, igualmente complejas son las soluciones. La superación de la violencia implica un trabajo que debe involucrar a la sociedad entera, un esfuerzo permanente que no debe esperar. Se trata de un proceso complejo en el que deben confluir múltiples esfuerzos orientados a transformar el modelo excluyente de organización social del país que hemos venido construyendo durante siglos.

Esta transformación implica la superación del paradigma educativo “competitivo” que se está promoviendo actualmente, así como la sustitución de las políticas acentuadamente represivas adoptadas frente a las pandillas juveniles, por políticas preventivas de largo plazo.

La transformación del modelo excluyente de organización social implica además, entre otras cosas, un mayor esfuerzo por superar la impunidad que alienta a más violencia, así como el cese de las violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario, recientemente denunciadas por la Procuraduría de Derechos Humanos. Implica, igualmente, una revisión de la actual legislación sobre la tenencia y portación de armas, por ser permisiva y por no contribuir al desarme de la población civil (en cuyas manos hay más de 400.000 armas).

Transformar el modelo social excluyente equivale a superar las situaciones que estuvieron al origen de los distintos conflictos internos que ha sufrido el país. Implica reconocer que la paz no es sólo “ausencia de guerra” y que se mata también con salarios de hambre, con el alza incontrolada de los precios de los combustibles, con la escasez de medicamentos en las farmacias del sistema hospitalario público, con la adopción de políticas económicas que alientan la emigración y con ello la disolución de la familia, con la exclusión de muchos niños y jóvenes del sistema educativo nacional, con el descuido del agro, con la ausencia de políticas serias de protección del medio ambiente, etc.

La superación de la violencia pasa por los hogares, las aulas, los espacios laborales, las iglesias, los centros de esparcimiento. Se trata de ir, en esos ambientes, más allá de la tolerancia, para construir un nuevo tipo de relaciones sociales fundamentado en el reconocimiento y acogida de la diversidad, en la solidaridad y en la justicia.

**Junio, 2005.**